

LA REINVENCIÓN.

Bases institucionales y estrategias generales para salir del antiguo ciclo.

ALFREDO JOIGNANT

La política chilena atraviesa por graves dificultades, en tiempos de crítica social y de repudio hacia una pesada definición del orden, de sus formas, hábitos y políticas. La derecha piñerista se ufana en ser portadora de una promesa de gobierno de los mejores, en virtud de una definición aristocrática de los talentos y de una ideología de la eficiencia totalmente insensible a las necesidades populares. La Concertación, por su parte, y en primerísimo lugar sus partidos, consagran legítimamente su candidatura presidencial, en el marco de un océano de indefiniciones sobre el futuro. Hay allí una enorme responsabilidad de los partidos de la coalición gobernante, de todos los partidos, quienes delegan en su candidato lo que es del resorte de una soberanía colectiva, cuyos actores debiesen sentirse obligados a tomar nota y actuar sobre varias formas de malestar que aquejan a la sociedad chilena: desde la exclusión política de varios millones de chilenos, hasta la inercia de innumerables explotaciones económicas y culturales que segregan de la vida cívica a las mujeres (aquella mitad y algo más de la soberanía popular), a esa gran mayoría de trabajadores que carecen de la facultad de negociar colectivamente sus derechos, a los viejos y jóvenes que no se reconocen en la política del día a día, a los chilenos que están aburridos del aprovechamiento social de quienes tienen mucho y conceden poco, y que están cansados de partidos que no entienden a una sociedad que ha mutado. Entiéndase bien: los partidos no son sólo necesarios, sino también deseables, en la medida en que éstos promuevan intereses y concepciones de mundo naturalmente disímiles, lo que exige políticas de la autenticidad.

Es en este contexto en el que se encuentra la Concertación, profundamente amenazada por la derecha, pero también por algunos senadores concertacionistas que apenas ocultan su interés en que la coalición sea derrotada, o en el mejor de los casos su indiferencia ante tal desenlace. No cabe interrogarse sobre las finalidades de los proyectos alternativos involucrados, pero sí acerca de sus razones y de las causas que los originan. Qué duda cabe: concluyendo el mes de mayo, existen pocas posibilidades de triunfar en la próxima contienda presidencial, de no mediar grandes redefiniciones de la Concertación. Este complejo momento obliga entonces a una reflexión serena, con el fin de proporcionar derroteros de salida y estrategias de reconducción de todas aquellas fuerzas, grupos y personas que no son de derecha, de cara a las próximas elecciones presidenciales. Este es un momento de voluntades de transformación y de poder, pero también de grandes decisiones acerca del proyecto histórico de la Concertación.

Los orígenes del desgaste

Tras casi 20 años de gobiernos concertacionistas, resulta evidente constatar el desgaste de esta coalición electoral y de gobierno entre cuatro partidos localizados en regiones amplias del centro y la izquierda. Muy distinto es explicar este fenómeno, atribuible a una infinidad de razones. Siguiendo un orden de recíproca determinación de hechos, sucesos y consecuencias, nos referimos al paulatino trizamiento del cemento que se encontró en el origen de la Concertación, esto es la común oposición a la dictadura y la continuidad de las luchas democratizadoras ante amenazas de regresión autoritaria, intermitentes durante los noventa, y completamente extinguidas durante la primera década del 2000; duradero imperio de la negociación política asimétrica con fuerzas de derecha minoritarias pero

dotadas de poder de veto, cuya intensidad no se justificaba a la luz de la evolución declinante de las amenazas; ruptura del vínculo entre sociedad política y sociedad civil tras la promoción de políticas de estabilización democrática, con consecuencias desmovilizadoras y productoras de apatía e indiferencia; relativa dificultad para habitar un mundo de normalidad democrática, por definición carente de grandes epopeyas; neutralización de la política (retomando la tesis de G.Vattimo) como consecuencia del dominio de una cierta razón tecnocrática, en el marco de una definición pura y dura de la gobernabilidad; confusión aún no resuelta acerca de la naturaleza política y el alcance histórico de la coalición (¿Concertación por la democracia o alianza de partidos de centro-izquierda?); generalizada incapacidad de reconocerse en un legado de gobierno que poco tiene que ver con la reproducción del proyecto económico-social de Pinochet, y definitivamente nada con la fantasía del “modelo neoliberal”, cuya continuidad habría hecho imposible la implementación de políticas redistributivas universales como el AUGE o la reciente reforma previsional; excesivo uso del verticalismo político en el marco de un presidencialismo reforzado; creciente heterogeneidad de intereses al interior de los partidos, con consecuencias devastadoras sobre la Concertación, lo que se ha traducido en una multiplicación de pequeños proyectos políticos de origen parlamentario, imposibles de conciliar tanto a escala partidaria como de coalición.

Son estas razones, entre muchas otras, las que impiden nombrar y valorar con claridad lo obrado y gobernado, permaneciendo petrificados ante esta gran política pública fallida como fue el Transantiago, cuyas correcciones han costado sangre, sudor y lágrimas. Son pocas las voces públicas que hablan de derechos conquistados, de redistribución del bienestar y de un Chile más justo y menos pobre, aunque no por ello menos desigual en aspectos medulares de nuestra existencia colectiva, con evidente predominio de la inequitativa distribución del ingreso. Es tanto lo conquistado en justicia y bienestar, que resulta asombroso constatar la masiva incapacidad de la dirigencia concertacionista en reivindicar una obra común, y por tanto un capital colectivo.

Tales son algunas de las manifestaciones generales del desgaste, las que cabría complementar con expresiones políticas particulares, especialmente tres quiebres partidarios de desigual gravedad y magnitud ocurridos en los últimos dos años. Con este crudo diagnóstico, resulta evidente concluir que el desgaste se inicia mucho antes del gobierno de la presidenta Bachelet, puesto que involucra aspectos atingentes al proyecto histórico, en primer lugar de los partidos y en seguida de la coalición, cuya visibilidad es explicable a la luz de inercias institucionales y electorales cada vez menos eficientes para competir con la derecha. Una de esas inercias es la creencia -vacua y carente de pertinencia- en la continuidad política del eje dictadura-democracia como fuente condensadora de todas las luchas y conductas. De ahora en adelante, más allá de cualquier resabio autoritario discernible en uno que otro comportamiento de la Alianza, la política en Chile se ordenará en torno a nuevos ejes de competencia, lo que se traduce en la caducidad de un largo ciclo histórico y en la necesidad de competir racionalmente por la hegemonía de lo que se encontrará en juego. Esto nos obliga a pensar en algo cualitativamente distinto, con el fin de enfrentar en buen pie una nueva era de luchas políticas y reformas sociales.

Para lograrlo, es imprescindible convencerse de que existen buenas razones para pensar la idea de República en movimiento, esto es la arquitectura de un tipo de democracia política y social cuyos cimientos ya se encuentran instalados. En calidad de república, Chile exhibe notables rasgos de normalidad y universalidad, pero muchos de ellos se originan en un espíritu conservador y autoritario inscrito en la propia Carta Fundamental. El verticalismo presidencial es una de sus expresiones institucionales, y la enorme reproducción de sus élites políticas constituye su más cruda manifestación. En tal sentido, la idea de una nueva República por la vía de una nueva Constitución se justifica plenamente, lo que debiese entenderse como una oferta de redistribución del poder político. En efecto,

a menudo olvidamos que seguimos habitando una República tensionada por racionalidades conservadoras y liberales, verticales y horizontales, elitistas y populares, aún bañada en la ideología del Estado subsidiario al ser éste concebido como fuente de todos los males, en el marco precario de un imperfecto sistema de pesos y contrapesos. Lo peor es que en este hábitat, seguimos haciendo como si sus instituciones y los comportamientos que se originan en ellas fuesen los únicos modos posibles de vivir juntos, en una estrecha definición de la libertad, la justicia y la igualdad. Estos tres principios no poseen el mismo valor para todos los chilenos, puesto que no todos se encuentran en igualdad de condiciones para orientar su vida política, económica y social de acuerdo con los mismos.

La desigualdad de acceso y ejercicio de estos tres principios cardinales en los más diversos ámbitos de la existencia colectiva se manifiesta ciertamente en la política, pero también en la actuación en una economía de mercado, en el hogar y en el trabajo. Es motivo de preocupación constatar que no todos los chilenos pueden comportarse como ciudadanos; como usuarios dispuestos a exigir satisfacción y buen trato con el servicio otorgado por una repartición pública; como clientes portadores de derechos en su relación con las casas comerciales; como trabajadores libres de negociar colectivamente sus condiciones laborales y salariales. Pese a quien le pese, la asimetría de las relaciones públicas y privadas permanece como una constante, mientras que la igualdad de condiciones sigue siendo una meta por alcanzar. Por consiguiente, no da lo mismo quien gobierna los destinos de nuestra comunidad de ciudadanos.

La doble crisis de legitimidad

La principal consecuencia de este desgaste ha consistido en la extinción de una forma “natural” de los liderazgos de la Concertación. Se debe entender por liderazgos “naturales” una capacidad indiscutida de ciertos dirigentes políticos para conducir la vida partidaria y parlamentaria, y desde allí producir sin mayores cuestionamientos las condiciones del liderazgo presidencial, al cabo de procesos y mecanismos que eran aceptados por todos. Dicho de otro modo, los liderazgos “naturales” en estos tres niveles de la acción política eran la legítima consecuencia de procedimientos competitivos o en su defecto objetivos, sean estos elecciones internas partidarias, mecanismos consensuados de selección de candidatos al parlamento, primarias de corte convencional o derechamente abiertas para dirimir al presidenciable, y más recientemente resultados de encuestas que eran racionalmente asimilados como principios de decisión y selección. Muy distinta es la realidad actualmente observada. Una parte considerable de los liderazgos políticos de los partidos de la Concertación se ha caracterizado por intentos de maximización de los intereses particulares en desmedro del interés de la coalición, olvidando que un sano y sólido liderazgo debe ser el fruto de una construcción política colectiva, y por añadidura socialmente consagrado.

La experiencia de los dos últimos años muestra crecientes dificultades para materializar la soberanía de los partidos. Es así como las elecciones partidarias no han logrado constituirse en mecanismos dirimientes de las legítimas diferencias internas, lo que ha incidido negativamente al interior de cada organización, así como en las relaciones entre las fuerzas aliadas y con sus respectivas bancadas parlamentarias. A diferencia del pasado, las minorías dentro de los partidos han dejado de reconocerse como tales, dificultando el ejercicio mayoritario, al punto de producir condiciones de negociación que restan eficacia al comportamiento general de la Concertación. Si bien estos fenómenos críticos no se dan con la misma intensidad en los cuatro partidos, en todos ellos se observan situaciones más o menos importantes de disidencia y, sobre todo, de desorden y descoordinación coalicional, especialmente en el ámbito legislativo. Es necesario detener esta peligrosa balcanización de la política concertacionista, en los tres niveles previamente señalados. Esta balcanización es la expresión de todas

las razones que se han encontrado en el origen del desgaste de la coalición. La consecuencia es que el comportamiento de todos los actores, parlamentarios y partidarios, ha terminado por deslegitimarlos precisamente como actores, con responsabilidades compartidas por todos, y no han contribuido a la consolidación de los liderazgos presidenciales.

Naturalmente, una parte de estos problemas se resuelven consensuando mecanismos institucionales de solución de controversias, así como procedimientos para la legitimación de todos los actores, partidarios y parlamentarios. Sin embargo, estos arreglos procedimentales constituyen tan sólo una parte de la solución, los que arriesgan con ser insuficientes de no mediar una profunda reinversión programática de la Concertación, probablemente en clave de refundación. Tales son los términos generales de nuestro desgaste, los que pueden ser revertidos duraderamente a través de la fabricación política de un doble cemento coalicional.

La reconstitución del vínculo concertacionista: nuevos cementos a través de políticas de proximidad

Con el fin de revertir esta situación, es preciso legitimar en nuevos términos a la totalidad de los liderazgos de la Concertación. Las condiciones para lograrlo son de dos tipos, procedimentales y programáticas, ambas constitutivas de un doble cemento.

Desde un punto de vista procedimental, es preciso legitimar a todos los actores involucrados, en el entendido fraternal que las soluciones finales a escala parlamentaria y partidaria recaen en la soberanía exclusiva de cada uno de los partidos concertados. Esta inevitable relegitimación debiese ir acompañada de una decisiva promoción de nuevos liderazgos, principalmente a la cabeza de cada uno de los partidos.

Lo anteriormente expuesto constituye tan sólo una dimensión procedimental de tratamiento y solución de las diferencias en estos dos niveles de la acción política. Como tal, constituye una política de proximidad en formato de mecanismo. Sin duda, se trata de una condición necesaria para generar las condiciones de reconducción de la Concertación. Pero no constituye una condición suficiente. Tanto y más importante que lo anterior es reconstituir el vínculo perdido entre por una parte los elencos partidarios y, por la otra, los elencos “ilustrados” pero con capacidades políticas (y no sólo “técnicas”), ambos erigidos en constructores principales de un segundo cemento, en este caso programático. Es este cemento el que se encontró en el origen del gran éxito de la Concertación, en virtud de un paciente trabajo de construcción de confianzas y complicidades entre lo mejor de la intelectualidad chilena de los ochenta y una influyente franja de dirigentes partidarios. Veinte años después, poco y nada permanece de esta complicidad, lo que en parte explica la desorientación concertacionista. La política partidista tiene mucha responsabilidad en el abandono de las ideas. Pero los intelectuales de los 90 y del 2000 también han renunciado a una de sus virtudes: transformar las ideas en energía política y social, al cabo de lo cual lo que hoy se aprecia es algo parecido a un divorcio.

La construcción del cemento programático debiese fundarse en el ideal de una democracia de proximidad, entendida como un tipo de régimen diseñado para reducir la distancia, política y psicológica, entre gobernantes y gobernados, sin socavar las exigencias institucionales que hacen posible gobernar a millones de personas en toda su complejidad. Como tal, constituye un diseño de equilibrio entre las condiciones de eficacia institucional de un gobierno democrático y las necesidades populares de participación y control de las instituciones del Estado. En este equilibrio, la legitimidad del régimen democrático y de sus autoridades es producida principalmente por la elección, no así la

confianza en las instituciones y en los gobiernos. El sufragio universal sigue siendo la energía suprema de legitimación sobre la cual descansa la relación de representación. Sin embargo, se hace cada vez más evidente que la representación política es de naturaleza crecientemente condicional: entre una y otra elección, la distancia entre representantes y gobernados es demasiado amplia, en sí misma generadora de desconfianza. Una democracia de proximidad debe apuntar a colmar esta brecha.

En efecto, desde hace años se viene señalando la creciente desafección de los chilenos con la actividad política en general, así como con algunas de las principales instituciones de la democracia representativa, especialmente con el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos. Prueba de ello es la enorme cantidad de datos subjetivos obtenidos a través de encuestas de opinión que corroboran esta desafección a gran escala: crecientes niveles de desaprobación, y hasta de hostilidad al papel desempeñado por el Congreso y los partidos; una generalizada desconfianza respecto del Poder Judicial; escasos niveles de interés por la política; un difuso sentimiento de escepticismo con la democracia como forma deseable de gobierno; una continua crítica a la administración de turno, refrendada por un desfase entre la popularidad de la que suele gozar en Chile el Presidente de la República en relación con el desempeño de su gobierno. Si uno extiende estos datos a la participación de los chilenos en organizaciones sociales (desde las juntas de vecinos hasta los clubes deportivos, pasando por el amplio abanico de asociaciones barriales o vinculadas a las iglesias), todas las encuestas revelan bajos niveles de asociatividad o, si se quiere, de capital social.

Aún más elocuentes son los datos objetivos de comportamiento político y electoral que se observan en Chile. En primer término, es casi un lugar común señalar los bajos niveles de participación en la vida interna de los partidos, los que no se condicen con la relativa amplitud de sus padrones de militantes: en tal sentido, las altísimas tasas de abstención en las elecciones internas partidarias constituyen un claro indicador de desafección de sus propios militantes, así como la fundada presunción de masiva ausencia de participación orgánica en la vida diaria de los partidos. En segundo lugar, y más profundamente, es posible apreciar en Chile una peligrosa evolución hacia formas masivas de desafección electoral de los ciudadanos. Para convencerse, es conveniente no perder de vista la enorme brecha observada entre la Población en Edad de Votar (PEV) y los electores inscritos en los registros electorales. Mientras en 1990 la PEV ascendía a 8,5 millones de personas y los electores inscritos a alrededor de 7,5 millones, la brecha entre ambas poblaciones comienza a ampliarse dramáticamente a partir de 1993, para alcanzar en el año 2005 a 11,3 millones de votantes potenciales cuya magnitud contrasta negativamente con los 8,2 millones de electores habilitados para ejercer su derecho a sufragar. Es inútil decir que al año 2009, esta brecha es aún más dramática. Por si fuera poco, si se acepta considerar a los no inscritos, a los votos nulos y blancos y a los abstencionistas como expresiones de desafección, entonces estos comportamientos constituyen al año 2005 el 57,42% de los electores inscritos en los registros electorales, una cifra alarmante a la hora de tomar seriamente en consideración la legitimidad de los eventos electorarios. Naturalmente, hoy en día, las cifras son aún más indigeribles.

No sería difícil proseguir con el catálogo de expresiones de apatía social y desafección política, por ejemplo al considerar algunas formas de participación no convencional en Chile: si bien se aprecian, por ejemplo, bajos niveles de actividad huelguística y formas muy episódicas de acción colectiva de cierta envergadura (exceptuando el caso excepcional del movimiento “pingüino”), a menudo éstas reflejan un rudo descontento con áreas específicas de producción del bienestar (por ejemplo, los “sub-contratistas”), sobre las cuales tanto la política como el Estado se muestran impotentes.

Naturalmente, no existen recetas fáciles, ni menos vías rápidas de solución a estos déficits

democráticos. Sin embargo, es posible imaginar un cemento programático formado por políticas de proximidad, cuyos principales ejes giran en torno a seis grandes tipos de políticas, limitándonos aquí a bosquejar un diseño que debe ser de naturaleza colectiva.

En primer lugar, políticas de redistribución del poder político, limitando la reelección para todos los actores electorales; implementación de cuotas incrementales de género hasta desembocar en la paridad; promoción de una nueva generación de reformas descentralizadoras.

En segundo lugar, políticas de proximidad con los ciudadanos, promoviendo la revocatoria del mandato previa reunión de condiciones objetivas exigentes; iniciativa popular de ley, rompiendo con la fantasía que esta iniciativa equivaldría a desposeer a los parlamentarios del monopolio sobre la formación de la ley (el caso suizo muestra cuan ilusorio es este temor); inscripción automática en los registros electorales.

En tercer lugar, políticas redistributivas del bienestar, insistiendo en políticas universales tales como el AUGE o la reforma previsional, por ejemplo en la reforma educacional o en políticas de vivienda, pero elevando los estándares de calidad: lo característico de las políticas redistributivas con fuerte impacto social no reside sólo en la universalidad de las mismas, sino también en que se basan en estándares de clase media y no en estándares populares.

En cuarto lugar, promoviendo políticas de garantías de derechos cada vez más extendidos de las personas, pero cerciorándose en que esos derechos sean efectivamente exigibles y se puedan cumplir: en efecto, no hacerlo es generar condiciones para la frustración masiva. Para lograrlo, es preciso reivindicar al Estado no por su tamaño, sino por sus capacidades regulatorias, distributivas, de eficiencia y de protección de las personas: un “Estado estratega” (R.Castel), que logre proteger exactamente a quienes más lo necesitan, con el fin de transformarse en custodio de la justicia e igualdad entre los hombres, y entre hombres y mujeres.

En quinto lugar, redistribución participativa del bienestar, promoviendo metodologías de explotación del capital social, lo que a su vez debiese redundar en una elevación de los niveles de confianza entre las personas, y entre éstas y las instituciones, gatillando dinámicas cooperativas amplias.

En sexto lugar, políticas de generación económica futura del bienestar: la innovación como herramienta del progreso, y no -como a veces se pretende crear- en calidad de mero instrumento de creación de riqueza.

Este segundo cemento, programático, aquí gruesamente bosquejado, debiese permitir responder la pregunta acerca de la naturaleza de la Concertación, y por tanto a disipar la confusión acerca de su alcance histórico. Es un error pensar que aquella Concertación de comienzos de los noventa, tan amplia como para abarcar a sectores de la derecha republicana, constituía la fórmula permanente de su éxito. Este error de juicio se explica por el carácter de gobierno de unidad nacional que caracterizó a la administración de Patricio Aylwin, en el marco de amenazas de regresión autoritaria evidentes en aquel entonces. Pero a medida que la democracia se normalizaba, también se hacía evidente la necesidad de que cada partido reivindicara su propia particularidad, lo que llevó a la Concertación a transitar en los hechos hacia una clásica coalición de centro-izquierda, sin jamás haber sacado las conclusiones programáticas y de proyecto histórico de su propia evolución. En tal sentido, es necesario afirmar que la Concertación es una alianza de centro-izquierda plural, formada por liberales, socialdemócratas y socialcristianos, reguladores y liberales políticos, católicos y laicos, lo que obliga a asumir en plenitud

su pluralidad constituyente. Esto significa que en la Concertación convergen fuerzas y actores provenientes de varias izquierdas y de un centro cuya fisonomía y magnitud han variado a lo largo del tiempo. Mientras que a comienzos de los noventa el centro era de gran envergadura electoral, con el tiempo los electores de centro han disminuido en dimensión, como bien lo muestran todas las encuestas. Para los fines de la acción, y para comprender las políticas de alianzas entre los cuatro partidos de la Concertación, el “centro” requiere ser entendido como un espacio político, social y de moderación de la competencia, inhibitoria (o habilitadora) para la ampliación (o restricción de las alianzas), el que ha sido predominantemente ocupado por el PDC, con una fuerte incapacidad de las izquierdas de la coalición en acompañar –desde la diferencia- al PDC en ese trabajo de poblamiento.

Es importante convencerse que el centro del espacio político se encuentra desde hace años en franca y abierta disputa, en un marco de extinción del eje dictadura/democracia, y todo indica que seguirá siendo terreno preferente de lucha por parte de la UDI y RN, tal vez secundados por pequeñas fuerzas nuevas tales como el PRI y Chile 1°. Esto da cuenta de la importancia del comportamiento político de los partidos de la izquierda de la Concertación respecto de su aliado demócratacristiano, en el entendido que no cualquier oferta es exigible para el partido de la flecha roja. Si la Concertación no logra darle forma al centro y hegemonizarlo -por sí sola o por la ampliación de sus alianzas y su oferta temática hacia mundos sociales cada vez amplios-, el riesgo de derrota cultural y electoral es considerable. Pero a su vez, el PDC debe entender que los partidos de la izquierda de la Concertación, junto a los que se encuentran fuera de la coalición, también encarnan y expresan intereses y malestares legítimos, los que deben encontrar cauces dentro de una alianza que ha perdido sus características de mosaico.

Sin embargo, no es sólo el centro el que se encuentra bajo amenaza: es también la izquierda de la Concertación. Esto se debe a una cierta falta de autenticidad por parte del PS, por ejemplo al no reconocerse como partido socialdemócrata y sin clarificar lo que la construcción de un Estado social de derechos quiere decir, en el más completo silencio acerca de las disonancias producidas por un discurso tecnocrático y no siempre muy político proveniente del Ministerio de Hacienda, en donde el papel regulador y distributivo del Estado no aflora espontáneamente. A su vez, el carácter de *catch all party* del PPD produce desconcierto, por ejemplo al constatar la coexistencia de discursos movimientistas con opciones más liberales, tecnocráticas y definitivamente de derecha (Schaulsohn, Flores), que desde hace poco han ido desapareciendo. Por cierto, esta característica del PPD constituye una legítima definición orgánica, y tal vez doctrinaria. Pero también significa que en el PPD la dimensión movimientista se ha ido imponiendo, sin producir aún las condiciones para la superación del desconcierto entre los partidos aliados, lo que se refrenda en opciones aliancistas problemáticas al interior de la Concertación (las dos listas a concejales en las últimas elecciones municipales).

Lo anterior obliga a interrogarse acerca de la vía de recomposición de las izquierdas de la Concertación. No es posible desconocer que se trata de una vía larga y difícil, pero inevitable de pensar en ella en el largo plazo: la construcción de una gran fuerza socialdemócrata del 30%, en clave de federación o de partido, con capacidad de morder hacia la izquierda social y el centro laico y liberal. A diferencia de los dos cementos de reconfiguración de la Concertación, procedimental y programático, repensar la fisonomía orgánica de sus izquierdas no supone plazos ni un calendario, pero sí un horizonte de conducta, evitando generar amenazas sobre el partido con capacidad preferente de ocupación del centro, el PDC.

Como se puede apreciar, la tarea de reinventar a la Concertación supone cumplir con requisitos de alta exigencia política, en el intento de dotarnos de un doble cemento para salir del antiguo ciclo. Al respecto, es importante convencerse que nuestros adversarios ya han cimentado su voluntad de poder,

en base a la tesis inicial del desalojo, complementada por una cierta ideología de la eficiencia y por estrategias de derecha amable. El destino de una Concertación política y social también pasa por voluntades de poder, aunque sustentadas en apropiaciones de una obra política común y afanes de superación, históricos en un sentido fuerte, para desde allí emprender la ruta de nuestra propia reinvención.